



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS  
CAUSAS LABORALES

Referencia	Acción de Tutela
Accionante:	María Claudia Ramirez
Accionado:	Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A
Radicación:	63-001-41-05-001- 2022-00378-00
Tema	Derecho fundamental de Petición.
Subtemas:	i) núcleo esencial – características de la respuesta. ii) carencia actual de objeto por hecho superado

Armenia, Dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)

### **SENTENCIA DE TUTELA.**

Decide el despacho en primera instancia la acción de tutela promovida por **María Claudia Ramirez**, en contra de **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A**

#### **I. ANTECEDENTES**

**María Claudia Ramirez**, promovió la acción constitucional con el propósito que se le ampare su derecho fundamental de “petición”, mismo que, supuestamente fue transgredido por la parte accionada.

Para motivar la acción señaló que el 29 de agosto de 2022 radicó solicitud de manera electrónica ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A con el fin de obtener información acerca de los aportes a pensión.

Indicó que, el día 31 de agosto de 2022 a través de su canal de Contacto Porvenir informó que, había recibido la solicitud y que el tiempo de respuesta sería entre tres y quince días hábiles dependiendo de la solicitud.

Finalmente indicó que, a la fecha, la accionada no le ha dado respuesta a su solicitud.

En contestación a la acción constitucional la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** informó que, la petición fue resuelta de manera clara, precisa y de fondo mediante comunicado enviado el 1 de septiembre de 2022 a la dirección electrónica informada.

Explicó que, la respuesta fue notificada por correo electrónico con el fin de acreditar el requisito de la debida notificación como elemento que integra el núcleo esencial del Derecho de Petición definido en el Sentencia C-951 del 2014.

Por último, solicitó que, se deniegue la presente acción de amparo en razón de la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado pues el derecho de petición ya fue debidamente contestado y así mismo procedió a emitir respuesta para la accionante.

Para resolver basten las siguientes,

#### I. **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como uno de los derechos fundamentales el de petición, según el cual, toda persona tiene la facultad de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la resolución de fondo de una solicitud, dentro de los términos previstos en la Ley.

Ahora, por virtud del artículo 13 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 -regulatoria del derecho de petición- toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por

motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. La norma agrega que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo; además señala que a través de ese mecanismo se puede solicitar “el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.

El artículo 14 ibid, señala los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones así: i) por regla general toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, de incumplirse este plazo comporta una sanción disciplinaria para quien debe atender la solicitud ii) las peticiones de documentos e información deberán resolverse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción; si no se ofrece una respuesta en ese lapso, se entiende que la solicitud ha sido aceptada, por lo que la Administración no puede negarse a entregar los documentos al peticionario, por lo que las copias deben entregarse dentro de los tres (3) días siguientes. La norma incluso admite la posibilidad de que no sea posible resolver la petición en los plazos referidos, pero para ello “la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En este orden de ideas, el derecho fundamental de petición comprende los siguientes elementos: a) La posibilidad cierta y

efectiva de elevar en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) La respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) La contestación material, que supone que la autoridad sobre la base de su competencia, se refiera de manera completa a los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), sin que puedan comprenderse evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo, pues la notificación forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, al punto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido (CC T 147 de 2006, T-077 de 2018).

Si no se cumple con los requisitos enunciados en precedencia, se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición.

Por otra parte, la Jurisprudencia Constitucional ha reiterado que la carencia actual de objeto se configura cuando la situación fáctica que motivó la tutela desaparece o se modifica en el sentido que cesa la presunta acción u omisión que sustentaba la tutela de los derechos fundamentales supuestamente conculcados; en esos eventos la petición de amparo carece de eficacia ya que desaparece el objeto jurídico sobre el cual recaería la decisión de tutela.

La figura de la carencia actual de objeto se puede presentar a través de tres formas: i) Daño consumado, que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o

impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva más no indemnizatoria. (SU-225 de 2013) ii) Hecho superado. se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inútil cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (T-382 de 2018). iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente. Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho (T-481 de 2016).

Descendiendo al asunto bajo estudio, se denota que, la accionante María Claudia Ramirez el 29 de agosto de 2022 presentó derecho de petición ante la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, en el cual solicitó los siguientes:**

*1. Se me suministre confirmación escrita de las novedades reportadas por el empleador y referidas por la asesora de PORVENIR.*

*2. Se me suministren copias de los soportes de dichas novedades.*

*3.Si existe mora en el pago de aportes por parte del empleador IAC GPP Servicios integrales Pereira, se me indique el valor pendiente de pago.*

La parte accionada si bien argumentó que se envió respuesta al correo electrónico [vikigalan@hotmail.com](mailto:vikigalan@hotmail.com), no existe prueba que permita colegir que en efecto se resolvió lo petitionado por la accionante en los términos explicados en la parte considerativa de la acción de tutela.

Ahora bien, el despacho no acepta que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, en su escrito de defensa asevere que, se envió a la dirección electrónica informada [vikigalan@hotmail.com](mailto:vikigalan@hotmail.com) pues la misma es disímil a la suministrada por la peticionaria, la cual manifestó al despacho través de llamada telefónica que, su dirección de correo es [maclaurr@gmail.com](mailto:maclaurr@gmail.com) situación que comprueba el juzgado, pues la petición salió desde el mencionado correo.

En consecuencia, a juicio de esta juzgadora, fluye que no hay prueba si quiera sumaria que, la accionante María Claudia Ramirez haya recibido respuesta material y completa a los asuntos planteados; por ende no se superó la vulneración al derecho de petición. Por lo que el derecho será tutelado y se ordenará a La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A que, en el término no mayor a 48 horas, se sirvan responder de fondo la petición de la accionante calendada el 29 de agosto de 2022 a la dirección reportada en la petición [maclaurr@gmail.com](mailto:maclaurr@gmail.com)

## II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho fundamental de petición de **MARÍA CLAUDIA RAMIREZ**.

**SEGUNDO: ORDENAR** a **LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A** que, en el término no mayor a 48 horas, se sirvan responder de fondo la petición de la accionante calendada el 29 de agosto de 2022 a la dirección reportada en la petición [maclaurr@gmail.com](mailto:maclaurr@gmail.com)

**TERCERO: NOTIFICAR** a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**CUARTO: REMITIR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,**

**Firmado Electronicamente**  
**MARILÚ PELÁEZ LONDOÑO**  
**JUEZA**

Firmado Por:  
Marilu Pelaez Londono

**Juez**  
**Juzgado Pequeñas Causas**  
**Laborales 001**  
**Armenia - Quindío**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **031a3f8a179e2f4109fcb3181e7de0a4d2fc7a7fd5de27d0e3ac5f3e929fb67**  
Documento generado en 18/10/2022 09:32:08 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**